

## **Guatemala, América Central y la asistencia estadounidense: ¿Fracasó la guerra contra el “crimen organizado”?**

*Silvina Maria Romano*<sup>1</sup>

### **Resumen**

Luego del supuesto “éxito” del Plan Colombia y de los controversiales resultados de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos está reforzando sus mecanismos de asistencia a la región de Centroamérica para la guerra contra el “crimen organizado”, particularmente en el marco de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central y a través de las operaciones del Comando Sur estadounidense desde Honduras. Ante en los Acuerdos de Paz, y sobre todo, la relación entre la (in)seguridad y los múltiples intereses económicos, en particular los vinculados al territorio. Se abordan en particular algunos aspectos de lo sucedido en Guatemala, para lo cual es necesario hacer referencia a la región centroamericana, pues es percibida como conjunto homogéneo por Estados Unidos. Por último, se hace referencia a la relación entre el aumento de la asistencia militar y el sugerente aumento de la Inversión Extranjera Directa en la región orientada a la industria extractiva.

**Palabras clave:** Seguridad. Comando Sur. Centroamérica. Guatemala.

## **Guatemala, América Central e a assistência estadunidense: fracassou a guerra contra o “crime organizado”?**

### **Resumo**

Considerando o suposto “êxito” do Plano Colômbia e dos resultados controversos da Iniciativa Mérida, os Estados Unidos está reforçando seus mecanismos de assistência à região da América Central para a guerra contra o “crime organizado”, particularmente no âmbito da Iniciativa Regional de Segurança para América Central e através das operações do Comando Sul estadunidense a partir de Honduras. Face a esse cenário, interessa destacar o papel das Forças Armadas e sua relação/tensão com os Acordos de Paz e, sobretudo, a relação entre a (in)segurança e os múltiplos interesses econômicos, em particular os vinculados ao território. São abordados, em especial, alguns aspectos do ocorrido na Guatemala, para o que é necessário fazer referência à região centro-americana, que é percebida como um conjunto homogêneo pelos Estados Unidos. Por último, se faz referência à relação entre o aumento da assistência militar e o sugestivo aumento de Investimento Estrangeiro Direto na região, orientados para a indústria extrativa.

**Palavras chave:** Segurança. Comando Sul. América Central. Guatemala.

## **Guatemala, Central America and United States assistance: did the war against “organized crime” fail?**

### **Abstract**

Considering the apparent success of Plan Colombia and the controversial results of Merida Initiative, the United States is enlarging its assistance to the Central American countries to fight the war against “organized crime”, specially within the frame of the Central America Regional Security Initiative, and through the United States Southern Command operations, placed in Honduras. In this context, we will highlight the place given to the armed forces and

<sup>1</sup> Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) UNAM. Correo electrónico: [silvinamceleste@gmail.com](mailto:silvinamceleste@gmail.com).

its relation/tension with the Peace Agreements, mainly to the relation between (in)security and the various economic interests associated to territory. We will tackle some aspects regarding Guatemala, that are closely related with what is happening in Central America as an homogeneous region, as it is seen by the United States. At last, we will give some data about the link between enlarging of military assistance programs and the surprising growth of foreign investment oriented to extractive industry.

**Keywords:** Security. Southern Command. Central America. Guatemala.

## Introducción

Ni Guatemala ni América Central aparecen primeras en el orden de prioridades de la agenda oficial de política exterior estadounidense, ni siquiera América Latina ocupa un espacio “privilegiado” en tales lineamientos. Sin embargo, en los últimos años de la primera gestión de Obama, los funcionarios estadounidenses han renovado el discurso sobre seguridad nacional en virtud de la amenaza del narcotráfico, el narco-terrorismo y el crimen organizado. Todos estos conceptos engloban un nuevo enemigo interno y transnacional de gran ambigüedad, en un escenario de creciente lucha por los derechos económicos y sociales, incluido el acceso a recursos naturales que abundan en dicha región. Pero esto no es nuevo. Unos meses después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, en septiembre de 1954, en el comité anticomunista de la Cámara de Diputados del congreso estadounidense, se organizaron una serie de sesiones para declarar sobre el comunismo en Guatemala. Al inaugurar estas sesiones, el presidente del comité enunció algunas palabras para justificar el derrocamiento de Arbenz:

En la paz y en la guerra esta Nación ha dependido de diversas materias primas provenientes del Sudeste Asiático que pueden obtenerse en América Latina. Por eso creo que América Latina es sumamente importante para los Estados Unidos, no sólo por su ubicación geográfica estratégica, al lado nuestro, sino como una fuente vital de materias primas (CÁMARA DE DIPUTADOS DE ESTADOS UNIDOS, 1954, p. 1-2).

Se sabe que uno de los factores detonantes para el derrocamiento de Arbenz fue la reforma agraria y la expropiación de la *United Fruit Company*, es decir, la disputa por la propiedad de la tierra.

Esta disputa, lejos de disiparse con el tiempo, se agravó no solamente en Guatemala y Centroamérica sino a lo largo y ancho de América Latina, en un entrelazamiento constante entre definiciones de seguridad hemisférica y seguridad interna que tienen como base real, no la “geopolítica” tradicional, sino la geoeconomía<sup>2</sup>, comprendida como parte esencial de la

<sup>2</sup> La geopolítica y la geoeconomía, inseparablemente tejidas (dada la íntima relación del hombre con la naturaleza al transformarla y transformarse en el proceso de trabajo), aluden a la forma como el capitalismo está pensando el espacio para que sea funcional de acuerdo con una lógica propia y con sus distintas estructuras nacionalistas de poder, donde estas últimas se juegan la hegemonía mundial. Es decir, son los

expansión del sistema capitalista. Dicha noción de seguridad se centró en la concepción de la “estabilidad” como condición de posibilidad de la democracia y el “desarrollo”. En este esquema, la asistencia militar se articuló con la asistencia para el desarrollo, como herramienta de *soft power*<sup>3</sup> capaz de legitimar el *hard power* (ROMANO, 2012).

### **El Comando Sur en América Central**

Según el Subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos sobre Narcóticos Internacionales, William Brownfield, Centroamérica “es una víctima de su propia geografía” con respecto al narcotráfico”, por eso “Estados Unidos busca aplicar mediante la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) los ejemplos aplicados del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida con México, tomando en cuenta sus propias realidades” (EL SIGLO, 2012).

Lo que se plantea desde EEUU no puede dejarse de lado, no solo por la injerencia histórica que ha tenido en Centroamérica y el Caribe, sino por el papel que juega el Comando Sur en la seguridad regional, que en buena medida opera desde Honduras<sup>4</sup>. Este Comando adquirió protagonismo a principio de la década de 1960, con la Conferencia de los Ejércitos Americanos, en la base estadounidense en Panamá. Uno de los documentos de dicha reunión establece que la misión de los ejércitos era proteger al continente de las acciones agresivas del movimiento comunista internacional, así como de la subversión interna (MCSHERRY, 2005).

Debe recordarse que el actual gobierno es producto de un golpe militar y posteriores “elecciones libres”, a lo que se suma que el gobierno estadounidense ha decidido mantener alguna ayuda a la Policía Nacional de Honduras, liberando el 20% de la ayuda retenida en los últimos años. El recorte parcial de esta ayuda, se debía al posible involucramiento del jefe de la Policía, Juan Carlos Bonilla en escuadrones de la muerte en los 1990. Según el documento donde se establece esta nueva condición, la ayuda no ha sido “congelada” sino redirigida (ISACSON, 2012a).

Lo anterior tiene sentido desde la cosmovisión de seguridad de planteada desde Estados Unidos. Según el jefe del Comando Sur, Douglas Fraser (2012, p. 2-3),

---

términos específicos en y con los que el Estado capitalista refleja su concepción del espacio y que por lo tanto él mismo inaugura, sin que lo anterior signifique que el Estado precapitalista no lo haya tenido desde su peculiar lógica histórica determinada (DELGADO RAMOS, 2002, p. 26).

<sup>3</sup> El “poder blando” implica el ejercicio del poder “por consenso” en lugar de la fuerza o la presión económica (que en general se asocian al *hard power*). El “creador” del concepto es Joseph Nye, Subsecretario de Defensa del gobierno de Bill Clinton, quien lo define como “la habilidad para atraer a otros (actores) por la legitimidad de las políticas estadounidenses y los valores que la guían” (NYE, 2004).

<sup>4</sup> De hecho, es llamativa la gravitación de dicho Comando a partir del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en 2009. Asimismo, vale la pena apuntar que en los últimos años, aumentó el negocio del narcotráfico en dicho país de forma precipitada.

Aunque no vemos una amenaza militar tradicional que emane de la región, las naciones de nuestro hemisferio están luchando con una amenaza asimétrica a la seguridad nacional e internacional: el Crimen Organizado Transnacional (COT) (...) En muchas partes de nuestro hemisferio -aunque más gravemente en América Central- el crimen organizado ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza volátil y potencialmente desestabilizadora para la seguridad ciudadana y nacional.

Aquí importa señalar que ya ha sido criticada la vaguedad y ambigüedad del concepto crimen organizado, así como la misma idea de “estabilización-desestabilización”<sup>5</sup>, que se utiliza una vez más, a pesar de que, en especial en Centroamérica, la “pacificación” ha llevado a una criminalización de la protesta, de modo que todo tipo de participación e irrupción en los espacios públicos aparece como una acción desestabilizadora y que va en contra de la paz y la democracia.

Siguiendo con la declaración de Fraser, parece que “América Central se ha convertido en la zona clave de transbordo para el tráfico ilícito, pues pasa por allí casi el 90% de la cocaína destinada a EUA (...) hay aumentos alarmantes en asesinatos y brutalidad” (FRASER, 2012, p. 3). Esto se asocia directamente con el aumento de la criminalidad y la violencia, subestimando otros factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la concentración de riqueza que forman parte de las relaciones dependientes y desiguales centro-periferia. El asunto es que “la creciente ola de violencia y tráfico ilícito, junto con los grandes recursos del crimen organizado transnacional, están desafiando las capacidades de las fuerzas policiales (...) En consecuencia, estos países ven a sus militares como las únicas entidades capaces de responder a estas amenazas” (FRASER, 2012, p. 3). Este párrafo es ampliamente sugerente, pues pone de relieve la afirmación de que las FFAA pueden verse como una solución a estos conflictos, como guardianas del orden interno.

La anterior apreciación, sin embargo, no se halla restringida a las FFAA estadounidenses. En ocasión de una entrevista a un activista de Derechos Humanos guatemalteco, al conversar sobre el proceso de desmilitarización, el entrevistado planteó una visión similar a la amenaza del narcotráfico y la forma de detenerlo:

“[con la reducción de las fuerzas armadas y la policía] nos quedamos con un ejército modesto, ¿verdad? De hecho, yo he estado en unos análisis donde se analiza el tema militar y se le redujo tanto el presupuesto que se le llama “ejército de pies descalzos”. No tiene armas, no tiene vehículos, tenía tres helicópteros, se cayó uno... Ehhhh bueno, está en una situación de crisis realmente, este ejército... Y el gran problema que se dio es que este ejército dejó áreas geográficas vacías... después de tener una presencia total, dejó áreas vacías. Y ya sabes aquel principio de que un espacio abandonado lo ocupa alguien inmediatamente ¿verdad? Quien lo ocupó fue el narcotráfico. Entonces, vastas regiones que fueron desocupadas por el ejército ahora son ocupadas por el narcotráfico. Y ahora cómo recuperar eso... no es fácil, porque es un ejército muy mal armado, con una policía muy mal equipada, muy poco profesional. Todos juntos no tienen la capacidad de volver a retomar el control del Estado, del territorio, perdón... entonces ahora se analiza eso y se ve así,

<sup>5</sup> Ver Delgado Ramos y Romano, 2011.

con preocupación”<sup>6</sup>.

Esta visión es inquietante si se recuerda el rol jugado por las FFAA en los procesos históricos relacionados con el terrorismo de Estado (particularmente durante la denominada guerra fría), en especial en Guatemala, donde el saldo es de 150.000-160.000 muertos, entre 40.000 y 45.000 desaparecidos, sumando a esto los miles de desplazados y refugiados (FIGUEROA IBARRA, 2006, p. 191). Además, si se atiende a las atribuciones más básicas de un Estado de Derecho, está claro que “el empleo de las FFAA supone siempre una situación de excepción y puede ser un problema que se naturalice esta excepción, es decir, que se “militarice” la inseguridad” (TIBILETTI, 2010, p. 329). Parte de las consecuencias de la mayor presencia del ejército en las calles, es que se criminaliza lo que antes eran derechos ciudadanos, cuestión que además adquiere carácter legal, pues se crea un marco jurídico para “legalizar” el Estado de excepción.

En Centroamérica, la política de seguridad planteada desde EUA se centra en la “seguridad ciudadana”, a diferencia del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida (SEELKE, 2012). Sería un plan basado, más bien, en los objetivos del cuarto pilar de la Iniciativa Mérida<sup>7</sup>. Es interesante esta “nueva” conceptualización sobre una solución desde lo social a la inseguridad ciudadana, pues en los hechos no difiere de prácticas anteriores, debido a que se tiende a reducir la “seguridad ciudadana” a la defensa del orden público, desvinculando el orden de la justicia (y con ello, de la desigual distribución y acceso a recursos).

Con el argumento de defender el Estado de Derecho, el orden y la seguridad tienden a prevalecer sobre la libertad y las garantías, a la vez que se instala la noción de que sólo con orden y seguridad se puede alcanzar el desarrollo económico y el bienestar social (URCUYO FOURNIER, 2009). En este punto, vale recordar que buena parte de la Doctrina de Seguridad Nacional se trataba de la “acción cívica” de las FFAA y su orientación hacia el desarrollo (TAPIA VALDÉS, 1980).

### **Asistencia militar y asistencia para el desarrollo en América Latina**

La asistencia “para el desarrollo” se enmarca en las estrategias de *soft power* promovidas particularmente por el gobierno de Obama, que fundamentó la pertinencia del mismo en el marco de la política exterior de las “Tres D” como herramienta para diferenciarse del discurso de George W. Bush (ROMANO, 2010). El presupuesto solicitado por la oficina

<sup>6</sup> Entrevista realizada en la ciudad de Guatemala, marzo 2012.

<sup>7</sup> Los cuatro pilares de la Iniciativa Mérida son: lucha contra narcotráfico; refuerzo Estado de Derecho; frontera del Siglo XXI; sociedades fuertes. Este último pilar implica una mayor asistencia económica, programas de contención, capacitación, etc. para obstaculizar la expansión del “crimen organizado”.

de Operaciones Exteriores para la Asistencia Internacional (*Foreign Operations Aid*) para América Latina y el Caribe para el Año Fiscal 2013 es de 1.74 mil millones de dólares. A simple vista se puede observar que el presupuesto en asistencia para el desarrollo (1.3 mil millones de dólares), es mayor al asignado para la asistencia militar (450 millones de dólares) (POE, 2012, p. 4). Sin embargo, debe señalarse que es el presupuesto total para la región más bajo desde 2007 y representa un 12 por ciento menos que lo solicitado para 2012. Asimismo, la asistencia para el desarrollo, se reducirá en un 6 por ciento comparado con el 2012. Con respecto a la asistencia militar, ha descendido en un 47 por ciento entre 2009 y 2013, de acuerdo con la reducción de la asistencia para Colombia y México. De este modo, y a pesar de la reducción en el presupuesto general para América Latina y considerando la reducción en el rubro de asistencia para el desarrollo, en líneas generales se estaría cumpliendo con los objetivos de la gestión Obama, orientados más hacia el *soft power* que al *hard power*.

Esto tiene dos aristas. Por un lado, y como bien se ha planteado con anterioridad (ver DELGADO RAMOS y ROMANO, 2011), tanto en el caso del Plan Colombia, pero sobre todo en el de la Iniciativa Mérida, la mayor inversión en la guerra contra el narcotráfico la han realizado los propios Estados (¡sirviéndose del presupuesto público!), mientras que Estados Unidos se ha vinculado más bien a cuestiones de entrenamiento, capacitación y provisión de equipos electrónicos para mejorar la recaudación, homogeneización y centralización de la información (en particular en zonas fronterizas).

Por otro lado, sigue sin estar clara la cantidad total y real que destina Estados Unidos a la asistencia militar. Es importante aclarar que el Departamento de Defensa también provee ayuda militar que no está consignada en el total aquí mencionado, que podrían agregar un tercio más de ayuda militar a lo hasta aquí planteado. Asimismo, y atendiendo a la imposibilidad de desvincular el sector público del sector privado, conviene preguntarse sobre las concesiones, tercerizaciones y acuerdos entre el Pentágono y sus contratistas; a la vez que debería prestarse atención a los acuerdos de tales empresas con los gobiernos de México, Colombia y países centroamericanos. Esto es parte del fenómeno de tercerización de la seguridad en Estados Unidos, así como de la “privatización” de la seguridad en los países donde se da la guerra contra el narcotráfico, con las implicancias que ello tiene.

Este (sumamente lucrativo) negocio de las armas ha llevado a que el Estado se retire del “monopolio de la violencia” permitiendo la existencia legal<sup>8</sup> de otros actores que buscan dicho monopolio, con la privatización de la seguridad<sup>9</sup>. Sin embargo, conviene recordar que

<sup>8</sup> Esto se suma al monopolio de la violencia ilegal por parte de los cárteles de droga, paramilitares, etc.

<sup>9</sup> No está de más recordar en este escenario de “flexibilización” de la soberanía, que el monopolio de la violencia física y simbólica es uno de los atributos de estatidad esenciales a las capacidades del Estado-Nación como tal.

“La diferencia entre ambos tipos de seguridad radica en que la seguridad pública debería tener un compromiso, de acuerdo con la ley con los derechos humanos y sus funciones deben ser públicas, independientes y neutrales, al contrario de las privadas que son dependientes y parciales y por tanto deben tener delimitaciones claras con respecto a la seguridad pública” (CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA, 2005, p. 9). Para mencionar algunos datos sobre lo que sucede en Guatemala, en el 2000 había 68 agencias de seguridad registradas; en el 2006 esta cifra subía a 128 agencias con 28.000 mil guardias, más 60000 guardias que trabajaban para agencias no autorizadas (DICKINS DE GIRÓN, 2011, p. 104).

Considerando el negocio, quedan pocas dudas sobre las ganancias de algunos sectores en escenarios de inestabilidad y guerra permanente, de “baja intensidad”, contra el “narcoterrorismo”, etc. No es un dato menor que para el 2011, las ventas de armas estadounidenses alcanzaron los 66.3 mil millones de dólares, es decir, más de tres cuartos del total de la venta de armas a nivel mundial, “el número de contratos anuales más alto en la historia de los programas de exportación estadounidenses” (MEHTAEMAIL, 2011).

Además, como se mencionó más arriba, el Estado estadounidense a través de sus empresas (tercerizando el servicio) vende equipos y brinda capacitación y entrenamiento. En el marco de la INCLE para Centroamérica, en el rubro *Regional Equipment and Training for Law Enforcement*, se preveía destinar parte de los fondos para establecer un Centro de Monitoreo Electrónico judicializado en El Salvador; además se preveía mejorar los equipos de comunicación, equipos para inspeccionar contrabando, equipos para la identificación de narcóticos, detectores de metales, equipos de protección personal. En otro rubro, el de “antinarcóticos”, se preveía la provisión de equipo de investigación y de oficina, apoyo logístico, entrenamiento, etc. (CONGRESSIONAL NOTIFICATION TRANSMISSIONAL SHEET, 2011).

### **Centroamérica: la seguridad ciudadana y el incremento de presupuesto militar**

Retomando los datos sobre el presupuesto para operaciones extranjeras del Departamento de Estado, a pesar de la tendencia al descenso en este tipo de ayuda, la asistencia militar para América Central se incrementará en un 35% en el 2013 (POE, 2012, p. 3)

De hecho, el presupuesto propuesto para el CARSI 2011 se distribuyó del siguiente modo:

- Fondo de Apoyo Económico (*Economic Support Fund*)<sup>10</sup> - 30.000.000 dólares;

<sup>10</sup> Incluye: el fondo de desarrollo social y económico de USAID; fondos de apoyo económico de la oficina de

- Narcóticos Internacional y Aplicación de la Ley (*International Narcotics and Law Enforcement*)<sup>11</sup> - 71.508.000 dólares.

En este informe se advierte claramente la situación en América Central (lo que justificaría el aumento de la asistencia militar para dicha región): “América Central continúa experimentando una crisis de seguridad ciudadana que amenaza los importantes logros de las democracias en las últimas décadas (...) Los niveles de violencia están entre los más altos del mundo, y la seguridad se ha transformado en la preocupación número uno de los ciudadanos, incluso por encima de las preocupaciones económicas” (CONGRESSIONAL NOTIFICATION TRANSMITTAL SHEET, 2011, p. 1).

Un reciente informe del BID-WOLA sobre asistencia para la seguridad ciudadana en América Central, muestra que EUA es el que otorga mayor asistencia no reembolsable (donaciones) en todos los rubros que hacen a la seguridad ciudadana, destacándose sus donaciones para “combatir el crimen organizado” (171.2 millones de dólares). Este monto es mucho mayor al donado por el gobierno de EUA para el fortalecimiento institucional (131.8 millones) o para la prevención de la violencia (65.8 millones). Considerando la vitalidad otorgada al rubro “combate al crimen organizado” conviene aclarar que incluye asistencia para proyectos y actividades destinadas a combatir el tráfico de drogas, personas, inmigrantes, terrorismo, lo que implica investigación criminal unidades de élite, inteligencia operativa, control de las fronteras (VILLAMAR, BELTRÁN y GONZÁLEZ, 2011).

Lo interesante es que si bien desde los Acuerdos de Paz se intentó promover en la región la autoridad civil por sobre la militar –acotar las funciones de las FFAA y excluirlas del mantenimiento del orden interno- así como educarlas en el marco del respeto a los Derechos Humanos, por lo hasta aquí mencionado, siempre en el escenario de la lucha contra el crimen organizado, se le otorga a las FFAA (nuevamente) un rol primordial en la seguridad interna. Y es que, por ejemplo en el caso de Guatemala, los ex militares se sumaron a las filas de la Policía Nacional, contradiciendo lo establecido en los Acuerdos de Paz. Un analista afirmaba al respecto: “En ambas instituciones hay riesgos. El mal policía es un ratero, el mal militar forma parte del crimen organizado” (PÚLSAR, 2006).

Todo lo anterior se complejiza al notar que buena parte de los policías y militares

---

Asuntos del Hemisferio Occidental. Rubros: Reformas políticas a nivel nacional y regional/respeto a la ley; prevención del crimen a nivel municipal; servicios para la juventud en riesgo.

<sup>11</sup> Incluye: Operaciones de Estabilidad y reformas en el sector de Seguridad que abarca: fronteras y puertos; Equipamiento y entrenamiento regional para la implementación de la ley; Anti-narcóticos que abarca: unidades vetadas; reducción de la demanda; apoyo aéreo; Interdicción marítima y territorial a nivel regional; erradicación; Crimen transnacional, abarca los siguientes rubros: mejora de capacidades; decomiso de activos financieros y lavado de dinero; Cumplimiento de la ley, abarca: Reforma del sector judicial; administración de las cárceles; mejoras en las academias y en el entrenamiento policial; policía de la comunidad.



desocupados han pasado a engrosar las bandas criminales o han sido empleados por empresas de seguridad privada, a decir de Azzellini (2009):

bajo el mando de compañías militares privadas de Estados Unidos, se están sumando y preparando miles y miles de ex-militares y ex-policías de muchísimos países latinoamericanos, muchos implicados en casos de crímenes de lesa humanidad (en contra de los Derechos Humanos) (...) Así que hay potencialmente un “pequeño” ejército contrarrevolucionario *stand by* que ya aprendió a operar con *standards* y bajo el mando del ejército de Estados Unidos.

Ante estas realidades, es difícil categorizar al crimen organizado como esencialmente extra estatal, cuando buena parte de sus filas están conformadas por miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad e inteligencia militar, hombres de negocio y civiles (URCUYO FOURNIER, 2009).

### **¿La guerra contra el narcotráfico no dio los resultados esperados?**

En septiembre de 2011, y en el escenario hasta aquí expuesto, el presidente guatemalteco Otto Perez Molina anunció un programa para “abrir nuevas bases militares para combatir a mafias mexicanas y colombianas del narcotráfico y reforzar la lucha contra redes paralelas que controlan el tráfico de personas y el contrabando generalizado de mercancía [y se están gestionando] 140 millones de dólares para que la Fuerza Aérea Guatemalteca fortalezca su capacidad de combate” (EL UNIVERSAL, 2012).

Asimismo, ha incrementado la presencia militar directa de Estados Unidos en la región. Se habla de la presencia de 200 marines estadounidenses en Guatemala, en el marco de la Operación Martillo para localizar actividad del cártel de Los Zetas; una unidad especial antipandillas que cubre el oeste de Guatemala, incluyendo las fronteras con El Salvador y Honduras y la región fronteriza con México (asiento de la Cuenca del Petén) uno de los depósitos de hidrocarburos que ha desatado una fiebre del petróleo (PALEY, 2012).

A esto se suma la presencia de la DEA (*Drug Enforcement Administration*) que estaría ayudando a los gobiernos de la región en la “lucha contra los Cártels”. En el caso de Honduras, este organismo ha comenzado a participar en operaciones junto a fuerzas policiales y militares hondureñas, un paso que ha generado polémica luego de que agentes norteamericanos mataran a dos presuntos narcotraficantes en sendos operativos (TERRA NOTICIAS, 2012). Dicha presencia se refuerza con la participación directa de FFAA estadounidenses. En agosto de 2012, Obama envió un equipo de 200 marines a patrullar la costa Oeste de Guatemala, en una operación sin precedentes para abatir a los narcotraficantes de Centroamérica (GLASER, 2012).

**Tabla 1- Asistencia militar y policial a Guatemala, todos los programas, 2007-2012 (en dólares)**

Programa de ayuda	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total por Programa
Sección 1004 Asistencia anti-narcóticos	1,865,000	2,479,000	2,478,000	9,152,000	16,709,000	9,145,000	41,828,000
Control Internacional de narcóticos y aplicación de la ley	13,000,000	2,472,000		7,500,000	8,300,000		31,272,000
Educación y entrenamiento militar internacional	467,000	491,000	253,837	797,000	825,000	800,000	3,633,837
Financiamiento Militar Extranjero		496,000	500,000		1,000,000	500,000	2,496,000

**Fuente:** Adaptado de Just the Facts (2011) - <http://justf.org/Country?country=Guatemala#sales>

Este aumento en las sumas destinadas a la asistencia militar por parte de Estados Unidos a Guatemala, coincide –por supuesto- con la intención de incrementar la presencia de militares en diversas zonas del país: en noviembre de 2010, el Ministerio de Defensa guatemalteco propuso el aumento de 16,7000 efectivos a 21,000 (NOTICIAS.COM, 2010). Los gastos en defensa para 2010 fueron de 159,860,766 dólares (CIA, 2011). Quizás comparado con el gasto militar de otros países, la suma no llama la atención. Sin embargo, es sugerente si se tiene en cuenta que en el 2009, la gestión de Álvaro Colom redujo el gasto público en 79 millones de dólares (NOTICIAS.COM, 2009) y si consideramos que el gasto público social *per capita* en Guatemala entre 2008-2009 era de 127 dólares, comparado con Cuba, donde la cifra era de 1793 dólares para el mismo período; Venezuela, 708 dólares (2007-2008); Bolivia, 178 dólares, 2007-2008; El Salvador 290 dólares (2007-2008) (CEPAL, 2010, p. 166). Además, Guatemala, entre el 2000 y el 2008 alcanzó el máximo de gasto social como porcentaje del PIB (un 7.5%), comparado con Venezuela (un 13% para los mismos años), Cuba, que alcanzó el 48% entre 2007 y 2008; Bolivia, donde el gasto social como parte del PIB alcanzó el 16 %, y Uruguay, donde este porcentaje llegó a 21 entre 2007 y 2008 (CEPAL, 2010, p. 165).

Considerando lo anterior, tal vez la guerra contra el narcotráfico no fracasó, pues el negocio no sólo permanece sino que se multiplica y diversifica. A partir de los '90, los cárteles ampliaron sus actividades ilícitas (secuestros, tráfico de armas, robo de autos, tráfico de personas, asesinato a la carta, etc.) abarcando cada vez a más grupos e incorporando cada vez más actividades (SOTOMAYOR VELÁZQUEZ, 2010). Además, esta nueva guerra “olvida” que las personas y grupos involucrados no tienen por objetivo tomar el poder del Estado para transformarse en gobernantes, tampoco discuten el sistema imperante. De hecho, al ser un negocio, más bien se busca cooptar a los gobiernos e influenciar en la toma de decisiones para favorecer las condiciones que lo beneficien. No es un dato menor que entre el 60 y 70% de las ganancias del negocio del narcotráfico se quedan en EUA. Tampoco es un

detalle que Estados Unidos sea el principal proveedor de armas para las FFAA y también para los narcotraficantes, además de ser Washington uno de los principales escenarios de lavado de dinero (SAXE-FERNÁNDEZ, 2012).

A pesar del diagnóstico estadounidense sobre lo perjudicial de las situaciones de inestabilidad para el aumento de IED, sobre todo en el caso de Centroamérica (*CONGRESSIONAL NOTIFICATION TRANSMITTAL SHEET*, 2011), las inversiones se incrementaron desde Colombia hasta México. En Colombia, la IED aumentó 26,2% en el primer semestre de 2012 (CRONISTA, 2012) y durante el 2011 la economía creció en un 5.9%, 1.9 % más que el año anterior. El sector de minas y canteros tuvo el mayor crecimiento en el PIB, con un 14.3% (*REVENUE WATCH INSTITUTE*, 2012, p. 49). Con respecto a México, en 2011 se mantuvo como el segundo gran receptor de IED en AL captando 19 mil 440 millones de dólares, un 10% más que en el 2010 (VANGUARDIA, 2012). Es interesante señalar que “más del 25% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, y de esas concesiones, el 80% pertenecen a empresas extranjeras, lideradas por las canadienses” (*REVENUE WATCH INSTITUTE*, 2012, p. 60).

Y esto coincide con un escenario a nivel Latinoamericano en el cual se percibe por un lado un creciente gasto en armas, y por otro la protección/saqueo de recursos naturales, recursos que serán obtenidos “ya sea por la vía de la paz o mediante movilizaciones armadas” (ROJAS ARAVENA, 2010, p. 78).

Esto mantiene una continuidad con la tendencia a nivel regional de incremento de IED, en especial en el sector primario (CEPAL, 2010, p. 11 y 58) asociado a la cantidad de recursos geoestratégicos presentes en AL: reservas de petróleo, gas, aproximadamente la mitad del total de agua potable del planeta, posee varios de los ríos más caudalosos del mundo y dos muy importantes acuíferos: el Guaraní y el de Chiapas (BORÓN, 2011, p. 8). Además, varios de los países de AL están en el Top ten de países mineros del mundo como productores mundiales de minerales estratégicos y metales preciosos (oro, plata, cobre y zinc, antimonio, bismuto, litio, niobio, torio, oro, zinc y uranio etc.) (RODRÍGUEZ REJA, 2010).

En este contexto, EUA es uno de los principales clientes tanto de combustibles como de minerales. Los principales países exportadores de crudo y derivados hacia EUA (según datos de 2007) son Canadá (con 19%), Arabia Saudita (15%), México (14%) y Venezuela (12%). Esto es que en total, Canadá y AL suman el 50% de los cerca de 10 millones de barriles diarios que importa. Para dar una idea del ritmo de transferencia de crudo, el caso de México es más que manifiesto pues ha transferido más del 80% del crudo que exporta a EU. Lo mismo sucede con los minerales. En 1980 EUA dependía al 100% de cuatro minerales y

de 16 más en el orden de un 30% - 99%. En 1992 tal dependencia era de 8 y 22 minerales respectivamente y, para 2009, de 19 y 26 (DELGADO RAMOS, 2010).

Ante este panorama, conviene recordar que previo a los acuerdos de seguridad centroamericanos liderados hoy por Estados Unidos, se impulsó el Plan Puebla Panamá (PPP), como integración para la infraestructura: oleoductos, gasoductos, hidroeléctricas, etc. a modo de favorecer la instalación de maquilas y la producción para exportaciones no tradicionales (BARAHONA, 2004). A pesar de las múltiples advertencias, quejas y solicitudes de organismos medioambientales y defensores de DDHH, muchos de los proyectos impulsados durante el sexenio del presidente Vicente Fox, persisten. Un ejemplo es el caso de las Hidroeléctricas de los Altos del Usumacinta ubicadas en la frontera entre el Petén, Guatemala, con Marqués de Comillas en Chiapas, obra que costaría aproximadamente 240 millones de dólares que serían aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “para apoyar un proyecto de interconexión eléctrica en América Central, primer paso hacia la integración energética mesoamericana planteada en el PPP”. En aquel entonces (inicios del nuevo milenio) ya se planteaba que “esto provocaría la inundación de un área calculada de 10 a 12 mil kilómetros cuadrados (casi la tercera parte del departamento del Petén, Guatemala), en donde se encuentran 800 sitios arqueológicos, entre ellos Piedras Negras, Yaxchilán y Altar de Sacrificios, asentamientos cooperativistas con más de 50.000 personas, pérdidas de millones de árboles de madera preciosas y vida silvestre” (CASTRO SOTO, 2002).

De este modo, uno de los claros objetivos del despliegue militar y de los planes de asistencia para el desarrollo es garantizar el acceso a estos recursos, en especial al territorio, a la vez se necesita una “mínima” estabilidad económico-social que permita el flujo de los recursos y el funcionamiento del mercado. Seguridad, es seguridad de acceso a recursos por parte del capital transnacional, en alianza con las oligarquías locales.

### **Polarización de la riqueza, violencia y “redefinición” del enemigo interno**

Ante el recrudecimiento del despojo debido al creciente protagonismo de la industria extractivista, se han incrementado los movimientos sociales y organismos dedicados a la lucha por derechos económicos, sociales y políticos vinculados a los recursos, en especial el derecho a la tierra (incluido el derecho comunitario a la misma). En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, se han “confundido” los asesinatos a líderes políticos vinculados a los movimientos que se oponen a los “megaproyectos” (hidroeléctricas, minería, etc.) y los asesinados y desaparecidos a manos del “crimen organizado” (DELGADO RAMOS, 2012).

Esta asociación del narcotráfico con la insurgencia ha contribuido a la criminalización de la resistencia social y con ello a la posibilidad de violar los derechos humanos, puesto que se asume que en ciertos casos el uso de la fuerza estatal “no es suficiente” para manejar el problema del modo en que es “requerido”<sup>12</sup>. México acumula más de 60 mil muertos, 10 mil desaparecidos y miles de desplazados asociados a operativos antinarcóticos, al tiempo que se perfila como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y periodistas. Esto se genera en un contexto en el que entre 2008 y 2010, la cantidad de personas en la pobreza aumentó de 48.8 millones a 52 millones, de modo que el 46.2% de la población vive en situación de pobreza. Además, 11.7 millones de personas viven en pobreza extrema, es decir el 10.4% de la población. Por último: 28 millones de personas tienen carencia por acceso a alimentación (hubo un aumento de 4.2 millones entre 2008 y 2010) (REPORTE INDIGO, 2012). Pero el Estado lucha contra el “crimen organizado” por medio de una militarización cada vez más costosa y perjudicial para las mayorías.

En el caso de Colombia, la denuncia por abuso a los derechos humanos perpetrada desde las FFAA y fuerzas paramilitares contra campesinos y líderes sindicales, como se mencionó anteriormente, llegó incluso hasta el Congreso estadounidense. El éxito del Plan Colombia, no es tan “exitoso” para la mayoría de los colombianos. Si bien para 2011, más de un millón 200 mil colombianos dejaron de ser pobres y 674 mil salieron de la indigencia, Colombia sigue teniendo uno de los índices de pobreza y miseria más altos de AL; es el cuarto país con mayor desigualdad en el mundo y el segundo en AL (sólo lo supera Haití).

Vale la pena retomar lo sucedido en Colombia (que resulta uno de los puntos e partida del mismo CARSÍ, como se mencionó en el primer párrafo de este escrito) pues la militarización y el conflicto interno desarrollados en el marco del PC generaron las condiciones para la inversión, pues muchos territorios ahora son controlados por las FFAA. Por ello no sorprende que en los últimos años, los gobiernos colombianos promuevan la inversión en la economía primaria y extractiva (GONZÁLEZ POZO, 2012). No es casual que en el marco de la propuesta de acuerdos de paz con las FARC, uno de los posibles motores de esto sea que “el aumento en el precio de *commodities* como el petróleo y los minerales, ha llevado al presidente Santos a referirse a la industria extractiva como ‘las locomotoras de la economía’. No obstante, muchas reservas potenciales de recursos naturales están en áreas que históricamente han estado bajo el control de la guerrilla. El gobierno de Santos, quizás esté calculando que una negociación para desmovilizar a las FARC sea el camino más rápido para

<sup>12</sup> Ver Informe Human Rights Watch sobre México, “Ni seguridad ni derechos” noviembre 2011. Disponible en: <http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos>

acceder a estas áreas que de repente han adquirido gran valor” (ISACSON, 2012a).

En América Central, considerando solamente el caso de Guatemala, se pone de relieve el aumento de la desigualdad y la polarización de los recursos y la riqueza, con la consiguiente represión y criminalización de la protesta social que se organiza en contra del modelo económico que pretende imponerse desde el Estado y las empresas transnacionales. La pobreza sigue siendo estructural. Para el 2006, de un total de 12.978.829 habitantes, 6.625.892 eran (son) pobres, es decir, la mitad de la población guatemalteca (INE, 2006). Además, el 74.8% de estos pobres son indígenas. También se sabe que desde inicios del siglo XXI, Guatemala es uno de los países con índices más altos de mortalidad en niños menores a 5 años, y que 1/5 de los niños sufre de desnutrición (UNDP-OEA 2010, p. 91).

Y es que con los Acuerdos de Paz se instaló también el neoliberalismo. Los gobiernos han apostado al turismo, la manufactura (maquila), *call centers*, agroindustria, minería, petróleo y producción y distribución de energía eléctrica (YEGENOVA y VELIZ, 2010, p. 260). Para 2011, los ingresos de IED en Centroamérica aumentaron 36% con respecto a 2010 y en Guatemala, en el 2011, dicha inversión aumentó un 13% en relación al año 2010 (*CENTRAL AMERICA DATA*, 2012). La IED en Guatemala se asocia al crecimiento de la industria extractivista y de materias primas, así como a la consolidación de la región como plataforma de exportación de bienes y servicios baratos. Esta situación ha contribuido a consolidar los movimientos de protesta en diversas regiones del país, la mayoría encabezados por pueblos indígenas que basan su lucha en la defensa del territorio, oponiéndose en particular a los proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustria para biocombustibles. Esto no ha sido sin costos, pues en los últimos años, han sido perseguidos, torturados y asesinados líderes de movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos (UDEFEQUA, 2010).

### **Reflexiones finales**

La injerencia de Estados Unidos en la región es uno de los factores que requiere de análisis, a pesar de que la región no figure como “blanco principal” de la política exterior oficial del país del Norte. Al inicio de este escrito se citó una declaración que deja en claro la vitalidad de América Latina para Estados Unidos en el mundo de la “guerra fría”.

En las últimas décadas, el enemigo “comunista” se ha transfigurado y expandido a un sinnúmero de “amenazas a la seguridad” de los Estados Unidos, legitimando con ello diversas prácticas de injerencia, desde el *soft power* a través de la asistencia “para el desarrollo” hasta el reinicio de las actividades de la IV Flota para “patrullar los mares”, la presencia en bases

militares de otros países, como Colombia y el permanente adiestramiento de las FFAA latinoamericanas.

Es fundamental, entonces, estar atentos al modo en que se expande el “exitoso” mecanismo de desarticulación del “crimen organizado” implementado mediante el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida a los países centroamericanos por medio del CARSI, pues este se plantea como el eslabón que une geopolítica y geoeconómicamente a los dos anteriores.

Por otra parte, el discurso a la guerra contra el narcotráfico, en la práctica se ha cristalizado en una lucha contrainsurgente que agudiza el escenario de violencia y de polarización de la riqueza y los recursos. Así, conviene reflexionar sobre el modo en que se define la (in)seguridad, cada vez más asociada a las necesidades de aquellos que poseen tales riquezas y recursos. De este modo, la amenaza real consiste en perder (aunque sea una mínima parte de) su propiedad privada, adquirida gracias a profundos y continuos procesos de explotación, extracción de excedentes y despojo tanto del trabajo como de los bienes comunes.

## Referencias

AZZELLINI, Darío. Los nuevos mercenarios: La impunidad organizada en el marco de la guerra global permanente. *Herramienta Web 2*, Buenos Aires, septiembre 2009. Disponible en: <http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-2/herramienta-web-2-indice>. Acceso: 22 Mar. 2012

BARAHONA, Amaru. En el TLC hemos entregado en bandeja nuestras ventajas más valiosas. *Envío*, Nicaragua, n. 270, septiembre, 2004, Universidad Centroamericana. Disponible en: <http://www.envio.org.ni/articulo/2473>. Acceso: 17 Fev. 2009.

BORÓN, Atilio. La coyuntura geopolítica en América Latina y el Caribe en 2010. *Rebellion*, 1 Ene. 2011.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. *Comité sobre la agresión comunista*: Subcomité sobre América Latina. Sep.-Oct. 1954.

CENTRAL AMERICA DATA. Aumenta 13% IED en Guatemala, abril 2012. Disponible en: [http://m.centralamericadata.com/es/article/home/Aumenta\\_13\\_IED\\_en\\_Guatemala](http://m.centralamericadata.com/es/article/home/Aumenta_13_IED_en_Guatemala). Acceso: 03 Mai. 2012

CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA. *Fuerzas de seguridad en Centroamérica: Balance y Perspectivas*. Ciudad de Guatemala, 2005.

- CEPAL. Comisión Económica para América Latina. El gasto público social en América Latina: tendencias generales e inversión en el desarrollo de capacidades de las nuevas generaciones. *Panorama de América Latina*, 2010. Disponible en: [www.eclac.org/.../9/.../PSE2010-Cap-III-gastopublico-preliminar.pdf](http://www.eclac.org/.../9/.../PSE2010-Cap-III-gastopublico-preliminar.pdf). Acceso: 1 Ene. 2011.
- CONGRESSIONAL NOTIFICATION TRANSMITTAL SHEET. United States Department of State, Washington D. C., 11 Ago. 2011.
- CRONISTA. Cronista. *Aumenta 26% la inversión extranjera directa en Colombia*. 8 ago. 2012. Disponible en: [http://www.cronista.com/contenidos/2012/08/08/noticia\\_0030.html](http://www.cronista.com/contenidos/2012/08/08/noticia_0030.html). Acceso: 8 Ago. 2012.
- DELGADO RAMOS, Gian C. *La amenaza biológica*. México: Plaza y Janes, 2002.
- DELGADO RAMOS, Gian C. Recursos naturales, seguridad y los lily-pods del Pentágono. *Revista Periferias*, Buenos Aires, n. 19, p. 145-159, 2010.
- DELGADO RAMOS, Gian C. Extractivismo minero, conflicto y resistencia social. *Realidad Económica*, Buenos Aires, n. 265, p. 60-84, 2012.
- DELGADO RAMOS, Gian C. y ROMANO, Silvina M. Political-Economic Factors in U.S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration. *Latin American Perspectives*, v. 38, n.4, p. 93-108, Jul. 2011.
- DEPARTAMENTO DE ESTADO. Boletín del Departamento de Estado. *El rol de Estados Unidos en el desarrollo económico en el extranjero*, Wilfred Maelnbaum, Jefe de la Sividión de inversiones y desarrollo económico, 1949.
- DICKINS DE GIRÓN, Avery. The security guard industry in Guatemala. In: O'NEILL, Kevin L.; THOMAS, Kendron (Eds.). *Securing the city: Neoliberalism, space, and insecurity in Guatemala*. Durham: Duke University Press, 2011.
- EL UNIVERSAL. El Universal. Guatemala abre bases en frontera con México, 4 sep. 2012. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/internacional/79240.html>. Acceso: 4 Sep. 2012.
- FIGUEROA IBARRA, Carlos. The culture of terror and Cold War in Guatemala. *Journal of Genocide Research*, v. 2, n. 8, p. 191-208, jun. 2006.
- GLASER, John. Obama Sends 200 Marines to Guatemala in Terrible Drug War Surge. 31 ago. 2012. Disponible en: <http://www.ucimc.org/content/rights-groups-fear-militarization-guatemala>. Acceso: 31 Ago. 2012.
- GONZÁLEZ POZO, Camilo. *Renta minera, petróleo y comunidades*. Ponencia en la Mesa Redonda: Plan Colombia-Iniciativa Mérida: paramilitarismo y despojo territorial, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). México, D. F. UNAM, 28 Ago. 2012.



ISACSON, Adam. Freeing up, and redirecting, aid to the Honduran National Police. *Just The Fact*. 14 Ago. 2012a. Disponible en: <http://justf.org/blog/2012/08/14/freeing-and-redirecting-aid-honduran-national-police>. Acceso: 14 Ago. 2012.

ISACSON, Adam. Prospects for renewed peace talks in Colombia. *Just the Facts*. 28 ago. 2012b. Disponible en: <http://justf.org/blog/2012/08/28/prospects-renewed-peace-talks-colombia>. Acceso: 28 Ago. 2012.

MEHTAEMAIL, Aaron. 2011 was a very good year for U.S. arms sales, with more than triple the business from the year before. *Center for Public Integrity*. 2012. Disponible en: <http://www.publicintegrity.org/2012/08/28/10767/us-sets-record-arms-sales-2011>. Acceso: 3 Mar. 2012.

MCSHERRY, Patrice. *Predatory States: Operation Condor and covert war in Latin America*. Maryland: Rowman & Littlefield, 2005.

NOTICIAS. COM. Noticias.com. Ejército proyecta ampliar número de efectivos. 17 nov. 2011. Disponible en: <http://noticias.com.gt/nacionales/20101117-ejercito-proyecta-ampliar-el-numero-de-efectivos.html>. Acceso: 17 Nov. 2011.

NYE, Joseph. The decline of American Power. *ForeignAffairs*, Nueva York, may.-jun., 2004. <http://www.foreignaffairs.com/articles/59888/joseph-s-nye-jr/the-decline-of-americas-soft-power>. Acceso: 22 Nov. 2004.

PALEY, Dawn. Militarization and Economic Transformation in Colombia & Mexico Drug War Capitalism. *Against the Current*, Detroit, jul.-ago. 2012.

POE, Abigail. The 2013 State Department and Foreign Operations Aid Request and Latin America and the Caribbean. *Fact Sheet*. Center for International Policy. Washington, D. C., 2013. Disponible en: <http://www.ciponline.org/research/entry/the-2013-state-department-and-foreign-operations-aid-request>. Acceso: 22 Mar. 2012.

PÚLSAR. Agencia Púlsar. *Militares serán incorporados a la Policía en Guatemala*. Mar. 2006. Disponible en: <http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=7396>. Acceso: 22 Mar. 2012.

REPORTE INDIGO. Reporte Indigo. El México Maravilloso de Calderón <http://www.reporteindigo.com/reportes/mexico/el-mexico-maravilloso-de-calderon>. Acceso: 22 Mar. 2012.

REVENUE WATCH INSTITUTE. Revenue Watch Institute. Tendencia de las Industrias extractivas de América Latina. *Reporte Anual*. 2011. Oficina Regional para América Latina, Lima.

RODRÍGUEZ REJA, María J. La centralidad de América Latina en la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos. *Rebelión*, 3 Nov. 2010.

- ROJAS, Aravena. América Latina: Defensa y seguridad en el Siglo XXI. In DONADÍO, Marcela (Comp.). *La reconstrucción de la seguridad nacional: defensa, democracia y la cuestión militar en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo, 2010.
- ROJO, Eric. Ponencia en el Coloquio Seguridad fronteriza. Iniciativa Mérida: evaluación y perspectivas, 23 abr. 2012, CEDAN, Tecnológico de Monterrey, México D.F.
- ROMANO, Silvina M. Obama y la Alianza para el Progreso: La retórica del desarrollo y la práctica de la 'seguridad interna'. *Revista Izquierda*, n. 16, p. 62-69, 2011. Disponible en: <http://www.laboratoriodeproduccion.com/?p=224>. Acceso: 22 Mar. 2012.
- ROMANO, Silvina M. Democracia liberal y seguridad en el Gobierno estadounidense: continuidades y rupturas. In: GANDÁSEGUI, Marco; CASTILLO FERNÁNDEZ, Dídimo (Orgs). *Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación*.
- ROMANO, Silvina M. La asistencia 'para el desarrollo' en las relaciones de Estados Unidos y América Latina. *Análisis Político*, n. 76, p. 197-218, 2012.
- SEELKE, Clare. *Evaluando la Iniciativa Mérida: los hechos*. Ponencia en el Coloquio Seguridad fronteriza. Iniciativa Mérida: evaluación y perspectivas. 23 Abr. 2012, CEDAN, Tecnológico de Monterrey, México, D.F.
- SOTOMAYOR VELÁZQUEZ, Arturo. Al son del narcotráfico en México: la amenaza transnacional y sus efectos colaterales en América Latina. In: DONADÍO, Marcela (Comp.). *La reconstrucción de la seguridad nacional: defensa, democracia y la cuestión militar en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo, 2010.
- TAPIA VALDÉS, Jorge. *El terrorismo de Estado: La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur*. México, D. F.: Nueva Imagen, 1980.
- TIBILETTI, Luis. El control del uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. In: DONADÍO, Marcela (Comp.). *La reconstrucción de la seguridad nacional: defensa, democracia y la cuestión militar en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo, 2010.
- UDEFEGUA. Situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos viviendo en el ámbito rural de Guatemala. *El Observador*, Guatemala, 2010.
- URCUYO FOURNIER, Constantino. *Aportes para el análisis de la integración centroamericana*. Colección Círculo de Copán, Centro Internacional para el Desarrollo Humano, 2009.
- VILLAMAR, Kariela; BELTRÁN, Adriana; GONZÁLEZ, Pablo. *Mapeo de las intervenciones en seguridad ciudadana en Centroamérica financiadas por la Cooperación Internacional*. Banco Interamericano de Desarrollo y Washington Office on Latin America, junio 2011.